Globethics Repository



Bolivia

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Cajías, Lupe
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-06 07:50:54
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219102

Bolivia

Del camino difícil al callejón oscuro

Lupe Cajías

«La guerra del agua», «los hechos de abril», «el quiebre del modelo» y otros títulos semejantes son apretados resúmenes para escenificar los recientes sucesos de Bolivia. El país sudamericano vivió una intensa semana con una aguerrida montonera dueña de las calles, bloqueos campesinos, un estado de sitio militarizado con muertos, heridos, confinados y una histórica rebelión policial. ¿Solo un estallido? ¿O es el prólogo de una renovada protesta social ante un gobierno errático, reaccionario y sin plan para dar continuidad a las reformas estructurales?

Era un sábado extraño. Abril es considerado el mes de la luz en Bolivia, sobre todo en la zona occidental, pues atrás quedan las lluvias del verano y aún no ha llegado el frío invierno, pero ya el cielo tiene la tonalidad azul y límpida que solo conocen los que viven cerca de las montañas.

Arriba ninguna nube rompía la monotonía. Sin embargo, en las calles de las principales ciudades, en las carreteras troncales y a solo 150 metros del Palacio de Gobierno, los jóvenes nacidos en democracia conocían por primera vez en carne propia aquello que les cuentan sus padres: militares patrullaban con metralletas en mano; vecinos de los barrios más pobres y agricultores los enfrentaban apenas con sus hondas y bombas Molótov; campesinos bloqueaban los caminos bajo el mando de sus jefes tradicionales y su confederación sindical y, en una de las esquinas de la plaza Murillo, policías amotinados contra el Gobierno, cubiertos con pasamontañas imitando a los zapatistas, circulaban también con sus armas en alto y dispuestos a defenderse.

Después de muchos años, las radios interrumpieron su programación habitual para hacer cadenas con pequeñas emisoras comunitarias e informar pa-

Lupe Cajías: periodista e historiadora boliviana; ex-dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa y de la Asociación de Periodistas de Bolivia; presidenta del Tribunal de Honor de los Periodistas de La Paz; ha publicado: *Juan Lechín, historia del movimiento obrero boliviano*; *Poder de la comunicación, la acumulación de la propiedad de los medios en América Latina*, entre otros.

Palabras clave: crisis política, reformas estructurales, Bolivia.

so a paso de los enfrentamientos, la caída de los primeros heridos, los muertos, la lista de los dirigentes presos y llevados a poblaciones apartadas en plena selva amazónica. Los periódicos imprimieron ediciones extra, como fue el caso de *La Prensa* y los corresponsales internacionales volvieron a recordar aquellos años en los cuales Bolivia era noticia porque un nuevo militar interrumpía en el Palacio Quemado o porque los sindicatos organizaban la resistencia y lo obligaban a irse.

¿Por qué Bolivia volvió a ser ese país turbulento? ¿Qué había sucedido para ese retorno a las expresiones violentas? Recordemos que Bolivia había logrado una vanguardia regional en ordenamiento económico, profundización democrática y reformas estructurales que parecían haber transformado al Estado y sus relaciones con la sociedad. Para los forasteros, los sucesos de abril eran una sorpresa y así lo reflejó la prensa internacional. Incluso para los habituales analistas diplomáticos no habían antecedentes explícitos para esperar semejante estallido. Aunque la mayoría de los editorialistas y columnistas insistía en los desaciertos del Gobierno y más de uno alertó sobre la acumulación de problemas no atendidos o mal enfrentados, también era cierto que al otro lado no existía una organización social fuerte.

La Central Obrera Boliviana (COB), famosa porque fue la única en la región que llegó a compartir el poder estatal y a crear el llamado «poder dual» atraviesa su peor crisis. Su columna vertebral, la combativa Federación de Mineros –vanguardia de 40 años de notable lucha sindical y política socialista– es hoy solo un puñado de trabajadores con una importancia relativa en la economía nacional. Los otros sectores sindicalizados enfrentan problemas similares y no queda ninguno de sus líderes históricos. Tan solo la Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) mantiene el vigor de antaño, pero ya con señales de divisiones internas. Las últimas protestas tenían sobre todo dos expresiones: los maestros liderizados por varias décadas por un grupo trotzkista y los campesinos productores de coca en el Chapare que han enfrentado permanentemente la política dirigida desde Estados Unidos para erradicar ese arbusto, de uso tradicional en Bolivia pero a la vez materia prima de la cocaína.

Muy pocos fueron los observadores locales que escribieron sobre las nuevas formas de organización que se estaban dando con nuevos actores para los nuevos escenarios. Los vecinos han desplazado a los obreros; los pequeños propietarios de tierra están mejor organizados que los mineros; las etnias originarias tienen voz más fuerte que los sindicatos de clase media. Sobre todo en el caso de Cochabamba, departamento central del país afectado notoriamente por la lucha antinarcóticos (se dice que han dejado de circular ahí millones de dólares en los últimos tres años) y que arrastraba un problema congénito: el acceso al agua.

En febrero de este año, una primera protesta fue menospreciada por el Gobierno. Sus voceros o representantes parlamentarios no fueron lúcidos a la

hora de interpretar la unidad de diversos sectores sociales en esa ciudad, la llegada de los llamados «regantes» o agricultores de los combativos valles circundantes y la decisión de los ciudadanos de tomar las calles para hacer sentir su protesta.

Para los ministros era apenas «la protesta de unos pocos» o «la participación de los narcotraficantes». Desconocieron autoridad a la flamante «Coordinadora del Agua», presidida por un trabajador fabril de formación izquierdista y restaron importancia a una entidad que solo se organizaba con un objetivo: que la poca agua alcance para todos y que, en principio, que la empresa extranjera contratada para desarrollar un megaproyecto de agua potable y riego atienda las demandas de los diversos usuarios sin basar sus inversiones en los aumentos a las tarifas. La incapacidad de comprender las causas de ese movimiento ajeno al sindicalismo tradicional y, principalmente, la inoperancia a la hora de negociar tendrían un alto costo para el Gobierno.

Aquella coyuntura habría de convertirse en la chispa y fue una histórica encrucijada que habría de desnudar la errónea política del general Hugo Banzer y la desilusión de una población que luchó por la democracia, que aguantó los rigores del ajuste estructural y que intentó un modelo propio, pero que 18 años después sigue con hambre. Una encrucijada que tenía múltiples aristas y que en su estallido complicó tanto el panorama que muchos empezaron a pregonar el posible cambio de gobierno.

Los siguientes son algunos de los procesos más relevantes para entender por qué pudo darse la «Guerra del Agua» y por qué Bolivia podría enfrentar en un futuro inmediato una peligrosa desestabilización.

Una megacoalición contradictoria

«He elegido el camino difícil» aceptó el general Hugo Banzer Suárez al asumir la presidencia de Bolivia en agosto de 1997. Entonces hacía referencia a la alianza de su partido derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN) con partidos políticos como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y los populistas Conciencia de Patria (Condepa) y Unión Cívica Solidaridad (UCS), además de otros grupos minoritarios.

Hasta ahora, el MIR no se ha renovado ni se ha liberado de las acusaciones de vínculos con el tráfico de drogas; la Corte Suprema de Justicia recién confirmó la culpabilidad de su subjefe Oscar Eid y su jefe Jaime Paz Zamora no tiene ingreso a Estados Unidos. Varios de sus ministros han caído acusados de corrupción. El MIR tiene una orientación socialdemócrata y en su momento fue perseguido por Banzer. Además,el MIR y ADN tienen constantes fricciones internas.

Condepa fue un partido surgido alrededor de un mítico radicalista, Carlos Palenque, con un discurso antiliberal y populista, pero que aceptó aliarse

con la ADN. Su paso por las alcaldías de La Paz y El Alto y por el Gobierno han dejado una estela de ineficacia y corrupción. Después de la muerte de su líder se ha dividido en decenas de fracciones. Fue sacado de la coalición en agosto de 1998.

UCS es otro partido populista liderizado por un empresario cervecero: Jhonny Fernández, hijo del fundador de la agrupación y «dueño» del partido. Hace ocho años aparecía como un posible sustituto a los partidos tradicionales, pero actualmente está reducido a algunas ciudades y está acusado formalmente de ser uno de los mayores evasores de impuestos en Bolivia. Ahora intenta una redefinición con partidos pequeños y ha enfrentado conflictos dentro de la propia alianza. Otro partido que perteneció a la mega fue Nueva Fuerza Republicana (NFR) con un líder local, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. La NFR rompió con el Gobierno a raíz de los conflictos de abril, pero también porque Reyes se consideró traicionado por Banzer y ADN. En calidad de aliados surgen grupos como la diminuta Democracia Cristiana, expresiones de indigenistas derechistas. Otros sectores menores de la derecha han abandonado al gobierno.

Algunos técnicos independientes estuvieron varios meses en el régimen, sobre todo en el área de las reformas estructurales, pero luego se marginaron.

Por otra parte, dentro de la propia ADN hay una profunda división entre los militantes ligados a la dictadura banzerista de los años 70, conocidos como «dinosaurios» y los jóvenes tecnócratas que intentan modernizar al partido y librarlo de su pasado represivo. Tres años después, el «camino difícil» es un callejón oscuro, teñido de presagios: ¿cómo llegará Bolivia al 2002?

El primer decreto

No había acabado de cruzar del Palacio Legislativo al Presidencial el 6 de agosto de 1997, cuando el flamante mandatario firmó su primer decreto para sacar a la Policía Nacional de su guardia personal. Reflejaba un viejo rencor que tienen los militares «grises» derrotados por los obreros y policías «verdes» en abril de 1952. Durante los gobiernos militares (1964-1982), los «grises» arrinconaron a los «verdes». Pero desde el retorno de la democracia, los policías volvieron a encargarse de la seguridad del Palacio. Banzer los vetó, y les restó roles en sus tareas específicas mientras daba puestos públicos a viejos camaradas de la época de la dictadura. Uno de sus ministros los llamó «burros y corruptos». Entre tanto, a Palacio retornó, guiado por el general Luis Iriarte (pariente de la familia presidencial), un grupo (para)militar vinculado al fascismo italiano y a negocios ilícitos como los casinos. Ambos hechos le costaron meses de incertidumbre a Banzer.

Los policías expresaron su descontento inicialmente con reclamos personales, aislados y con respuestas que solo eran precipitados cambios en los mandos. La rabia se acumulaba y a la redacción de los periódicos llegaban panfletos y

consignas antioficiales supuestamente firmadas por grupos clandestinos de oficiales policías. Pocos analistas les hicieron caso.

Un hecho fortuito interrumpiría el aparente control de la situación. Un joven policía inició una huelga de hambre en Santa Cruz para no ser trasladado porque por su bajo salario, sin su familia no podría sobrevivir. Primero fue noticia anecdótica, pero a los pocos días lo acompañaron las esposas de otros policías en La Paz y a ellas se sumó una sargento. El Gobierno las mandó arrestar. A las pocas horas, el principal regimiento policial de La Paz se amotinó y presentó un pliego petitorio similar al de los sindicatos.

A solo una manzana del Palacio de Gobierno, parapetados con pasamontañas y sus armas los policías desafiaron a los militares. El público llegó solidario y la televisión trasmitió en vivo cómo ancianas, mujeres humildes, jóvenes traían comida y vituallas y daban vivas a los rebeldes. Una humilde esposa de un policía raso sacó a empujones a los jefes policiales. No había quién hiciera cumplir el Estado de Sitio dictado casi al mismo tiempo que el estallido del motín. Ese error de cálculo hizo fracasar la medida oficial y el Gobierno perdió el control. Hubo un momento de gran tensión cuando un grupo militar intentó enfrentar a los policías y faltó poco para que iniciaran los disparos. Al amanecer, el Gobierno había cedido y los «burros y corruptos» ganaron la batalla y aislaron al ministro de Gobierno, pronto trasladado a otras funciones.

Por el otro lado el caso del fascista Marino Diodato, afectó las relaciones del Gobierno y del propio Banzer con la embajada de EEUU. Es un tema que lo tocó personalmente porque involucraba a su familia cercana. Además, la llegada de grabaciones de conversaciones íntimas del propio presidente al periódico *La Prensa* mostró cuán indefensa está la seguridad en Palacio.

El desarrollo sostenible a segundo plano

Durante la etapa de Jaime Paz (1989-1993), el paradigma del desarrollo sostenible comenzó a ser tomado en cuenta en las políticas públicas, luego fue protagonista y eje de todo el programa de desarrollo durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Mdsma) albergó la planificación estatal y las oficinas de atención a los viejos/nuevos actores sociales: mujeres, niños, ancianos, pueblos originarios, además, obviamente, de todo lo relacionado con el medio ambiente.

La propuesta original boliviana, le permitió al país organizar la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, en Santa Cruz de la Sierra (1996). Banzer ni la nombró en la Cumbre de Santiago, pero sí fue resaltada por su colega chileno Eduardo Frei y en los documentos oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ese modelo de desarrollo dejó de ser el marco conceptual. Un ginecólogo se hizo cargo del Mdsma y en las otras oficinas los funcionarios en servicio civil fueron reemplazados por militantes oficialistas. Como resultado hubo un freno a toda esa política de desarrollo sostenible y

humano, y los primeros roces que son casi fracturas con los países donantes, que tanto apostaron por el «modelo boliviano». También se descuidó el tratamiento profesional y técnico a temas como el acceso al agua. «La guerra del agua» es el caso más patético que ejemplifica que las soluciones políticas demagógicas son catastróficas para las demandas de servicios básicos.

Del Mdsma depende uno de los viceministerios más expresivos del nuevo modelo de desarrollo que se trazó Bolivia: la Participación Popular. Fue un programa exportado por Bolivia a otros países del continente y al cono sur africano. El actual gobierno le bajó el perfil y sus nuevos representantes no lograron mantener la dinámica revolucionaria que había logrado hasta 1997. El proceso continuó por voluntad de los beneficiarios más que por la voluntad política oficial.

Las inversiones extranjeras

El país había cambiado del capitalismo de Estado a la economía abierta; primero a través del Ajuste Estructural y más aún con la capitalización de las empresas estratégicas del Estado. La capitalización tenía zonas grises, y a la vez era el mayor cambio a un «modus vivendi»; algunos contratos fueron más exitosos, pero con todo la inversión extranjera superó los índices históricos y 1legó un capital fresco que permitió al país estar mejor preparado para las crisis económicas de final del siglo.

Sin embargo, la mayor exigencia de los inversionistas era seguridad jurídica. Desde que subió el nuevo gobierno amenazó con cambios en las reglas del juego. Declaraciones que una y otra vez salen en la prensa muestran las contradicciones oficiales. Amenazas o favoritismo a otras empresas como el caso Petrobras, han enojado a empresas extranjeras y han limitado iniciativas nacionales. Solo un ejemplo, en los últimos meses han salido 62 empresas mineras de Bolivia y la exitosa Sitel-Entel anunció que reinvertirá en otros países de la región; la inversión pública y privada bajó y en 1999 el país apenas creció 0,8, cuatro puntos menos que los anunciados. La salida de la empresa «Aguas del Tunari» a raíz del conflicto en Cochabamba fue otro indicador negativo para el modelo actual.

Retrocesos en la tenencia de la tierra

Otro tema que fue parte de las últimas gestiones, con apoyo del Banco Mundial, fue el ordenamiento de la tenencia de la tierra. Una demanda aún central en todos los países latinoamericanos y de particular sensibilidad para un país pluricultural y agrario como Bolivia.

En 1992 empezó la intervención en la corrupta ex-oficina de Reforma Agraria, acción que había de transformarse en una gran nueva Reforma Agraria que reordenaba el territorio, restablecía demandas anteriores y hacía dos grandes distinciones. Las comunidades y pueblos originarios podían deman-

dar tierra y el Estado se las dotaba; ellos tenían prioridad. Los otros terrenos ingresaban al mercado y podían ser comprados por el mejor ofertante. Los empresarios debían pagar impuestos por sus inversiones y mejoras.

Banzer se deshizo de la directiva institucional, nombró primero a un empresario vinculado a lo que se conoce como «logias» del poder económico de Santa Cruz y luego a un militar retirado. Nuevas tensiones con la cooperación internacional obligaron a buscar una dirección más técnica. Entre tanto, a través de decretos ha cambiado temas centrales de la Ley INRA. Varios estudios independientes muestran la errónea interpretación que se ha hecho de esa legislación, sobre todo en el Oriente del país. El Gobierno ha firmado al menos tres decretos que favorecen a nuevos terratenientes y la acumulación de tierra en pocas manos, un caldo de cultivo de violencia social que ya se reflejó en el caso de la Chiquitanía y en la Amazonia. Los indígenas han iniciado una nueva marcha hasta La Paz para defenderse de los abusos que sufren en sus propiedades y territorios, y aunque solo el matutino católico *Presencia* se ha ocupado regularmente de ello, es otro fantasma que ronda la estabilidad.

La poca atención a los campesinos y a sus demandas urgentes por los efectos de fenómenos naturales como «El Niño» estallaron en los bloqueos de abril. Una vez más, las autoridades no habían sido capaces de detectar que se estaban acumulando las protestas y que la salida podría ser violenta. Los enfrentamientos más duros se dieron en Achacachi, una tradicional zona combativa, donde murieron campesinos, pero también los agrarios mataron a un oficial y enfrentaron a las patrullas militares. Ahora la justicia ha condenado al Gobierno a indemnizar a los familiares de las víctimas, pero ninguna otra medida radical ha sido asumida para frenar el descontento.

Retrocesos en la desconcentración del poder

La Participación Popular era parte del modelo de descentralización, es decir de descongestión del poder. Impulsada por diferentes ideólogos logró estructurar un sistema que recogía una historia nacional de cabildos, de asambleas y poder local con una agenda internacional que auspiciaba la participación de la ciudadanía y los nuevos espacios para la intervención de la sociedad civil. Repartía los ingresos nacionales para que llegaran al último municipio y removía a los organismos de base y originarios. Hería de muerte a sindicatos y partidos tradicionales que dejaron de ser los vínculos monopólicos de las demandas locales con el Estado.

La participación era complementada con un proceso de descentralización que atendía antiguas exigencias de las regiones y restaba poder al eje central. Con una visión volcada al pasado, la actual coalición gobernante provocó una reconcentración del poder, casi siempre en manos de sus militantes anticuados y muchos –demasiados– familiares y militares; otro componente que afectó dar soluciones a tiempo a las demandas de los departamentos.

Numerosos paros cívicos no fueron prevenidos por la estrechez de visión de la plaza Murillo y ese descontento también apareció en las protestas de abril.

Narcotráfico

La obediencia absoluta a EEUU sin sopesar el impacto económico y social que sería la erradicación forzosa de los cultivos de coca fue la política contra el circuito coca-cocaína. Otro elemento que también está detrás de la semana sangrienta en Cochabamba, departamento donde queda la zona roja del Chapare.

El Gobierno muestra como un logro la drástica baja en los cultivos de coca, pero las alternativas agropecuarias no contaron con políticas públicas complementarias y coherentes; el éxito se convirtió en «boomerang»: EEUU da menos ayuda (la décima parte que aprobó para Colombia) y las zonas rurales de migración interna siguen sin atención.

Las lecciones de abril

El estallido social fue inicialmente enfrentado por la represión, sin embargo, ni siquiera ese plan estaba bien estructurado y las contradicciones internas afloraron a la hora de aplicarlo. El Estado de Sitio fue desobedecido por la población y los jóvenes tomaron la ciudad de Cochabamba; conocidos como los «guerreros del agua» y como nuevos actores de las luchas sociales, habrían de ganar la gran batalla.

La empresa multinacional abandonó el país, instituciones locales se han hecho cargo de un nuevo proyecto que no signifique aumentar las tarifas, pero aún el valle enfrenta la falta de agua. El Estado de Sitio fue suspendido a los pocos días y uno de los militares francotiradores filmados por la televisión disparando de civil contra los manifestantes enfrenta un juicio. No obstante, las soluciones de fondo parece que tardarán mucho más. Tres años después de asumir el mando, el general Banzer todavía no tiene definido un plan de gobierno.

Actualmente, el nuevo ministro de Hacienda, Ronald MacLean intenta dar al régimen otro tono. Su discurso recupera lo central del «modelo boliviano» y sabe que para espantar el miedo al fracaso absoluto la actual administración debe rescatar la Participación Popular, el poder municipal y el modelo de desarrollo sostenible y humano. Hay la posibilidad de escuchar y atender los resultados del «Foro Jubileo 2000», protagonizado por la Iglesia Católica y unas 500 organizaciones de base con motivo del alivio a la deuda externa y que sirvió para canalizar las rebeldías de los sectores más aislados.

El Gobierno se desligó del prefecto de La Paz, Luis Fernando Valle, yerno del general, que de alguna manera era el rostro más citado del nepotismo y la corrupción. Los cambios ministeriales fueron casi siempre por denuncias de la prensa por casos concretos de corrupción. Hace unos días, desde el propio

Ejecutivo se prescindió de altos funcionarios que ganaban jugosos dobles sueldos y hay señales de un nuevo empeño de lucha contra la corrupción.

En víspera de un gran Diálogo Nacional, la presión internacional publicó sus dudas y temores porque el régimen persiste en funcionarios de perfil excesivamente político, poco académico y con tufillo a corrupción. El Gobierno ha intentado escuchar esas advertencias y tímidos cambios parece que apuntan a cumplir con los compromisos para lograr acceder al programa HIPC de condonación de deuda de países pobres altamente endeudados. El Diálogo se ha desarrollado en todos los municipios y ha reunido las demandas de decenas de actores sociales que quieren decir desde las bases qué se debe hacer con el alivio de la deuda y sobre todo qué organizaciones o mecanismos deben ejercer el control social para su justa distribución.

Las reuniones fueron masivas y participativas. Sin embargo, no está claro cómo actuará el Gobierno para recuperar esa reflexión y devolverla con políticas y acciones. Algunos pesimistas ya han escrito que podría ser un nuevo fracaso y un nuevo polvorín. Es una encrucijada, quizá la última. Hasta ahora los principales partidos de la oposición no han apoyado la salida de Banzer, pero no por ello terminan los rumores: ¿llegará al 2002? Solo que si se cae Banzer, ¿qué pasará con Bolivia?

La Paz, julio de 2000

Revista Venezolana de Gerencia (RVG)

Abril 2000 Maracaibo Nº 10

EDITORIAL: **Luis Rodríguez-Mena**. ARTICULOS: **Luis Rodríguez-Mena**, El paternalismo de Estado y la reconversión industrial: resumen analítico de una experiencia corporativa. **Emilia Bermúdez**, Nuevas tecnologías y política. **Omaira García de Berríos**, La ética en la gerencia, vista a través del desarrollo organizacional. **Osvaldo Battistini y Juan Montes Cató**, Flexibilización laboral en Argentina. Un camino hacia la precarización y la desocupación. **Mercedes Ferrer y Arroyo y Nancy Avila de Montero**, Construir la ciudad: un paradigma de gestión urbana. Propuesta de un método para viabilizar planes urbanos. ENSAYO: **Naum Kliksberg**, La educación antes y después de internet. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN GERENCIA. REVISTAS.

Revista Venezolana de Gerencia *es una publicación cuatrimestral del Vice-Rectorado Académico de la Universidad del Zulia. Dirección: Vice-Rectorado Académico, Universidad del Zulia, Edificio del Rectorado, Av. Guajira con calle 66, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Apartado Postal 15.401. Telefax: 58-61-528.397; e-mail: Revista_Venezolana_Ge-rencia@luz.ve; haydeeochoa@iamnet.com*